



Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publica oficialmente en ella; y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia. (*Ley de 3 de Noviembre de 1857.*)

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines oficiales, se han de remitir al Gobernador respectivo, por cuyo conducto se pasará á los editores de los mencionados periódicos. (*Real orden de 3 de Abril de 1839.*)

SECCIONES EN QUE SE HALLA DIVIDIDO EL BOLETIN OFICIAL.

1.º Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Circulares y Reglamentos autorizados por los Excmos. Sres. Ministros.

2.º Ordenes y disposiciones emanadas de este Gobierno sea cual fuere la Corporación ó dependencia administrativa de donde proceda.

3.º Ordenes y disposiciones de las Direcciones generales del Ministerio de Hacienda, de los Señores Administrador,

Contador y Tesorero de Hacienda pública, Administrador de Propiedades y Derechos del Estado y demás dependencias de la Administración económica provincial.

4.º Ordenes y disposiciones de las Direcciones generales de todos los Ministerios, Excmo. Sr. Capitan general del Distrito, Gobernador militar, Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia, Srs. Jueces de primera instancia y demás Autoridades militares y judiciales de la provincia.

5.º Los anuncios oficiales, sea cual fuere la Autoridad de que procedan.

Se publica los lunes, miércoles y viernes de cada semana.

SECCION PRIMERA.

PARTE OFICIAL DE LA GACETA.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (q. D. g.) y su augusta Real familia, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 15 de Marzo de 1866, en los autos de competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de primera instancia de Pamplona y el de Almodóvar del Campo acerca del conocimiento de la demanda entablada por D. Juan Inza y otros, contra D. José Costi, como Presidente de la Sociedad minera *La Victoria*, sobre nulidad del acuerdo tomado en Junta de 20 de Diciembre de 1858, y como consecuencia la del proyecto de venta celebrado por los representantes de la Sociedad:

Resultando que por escritura otorgada en 18 de Mayo de 1851 en la villa de Almodóvar del Campo, el Marqués de Caballero, D. Juan Inza, D. José Herrero y otros formaron sociedad minera con el nombre de *La Victoria* para la explotación y beneficio de las minas que los otorgantes estimaran conveniente al interés social, cediendo desde luego á la Compañía los expresados sujetos varias pertenencias sitas en término de aquella villa de Almodóvar; y formado posteriormente el reglamento para el Gobierno y dirección de la Sociedad, por uno de los artículos se fijó que la junta directiva residiera en la ciudad de Pamplona:

Resultando que en junta de accionistas celebrada en la referida ciudad de Pam-

plona en 20 de Diciembre de 1858 se acordó la liquidación de la Sociedad, nombrándose liquidadores con encargo de que buscaran persona ó compañía que continuara la explotación de las minas, y en su caso procedieran á la venta bajo las condiciones que determinaron:

Resultando que los liquidadores nombrados por escritura otorgada en la mencionada ciudad de Pamplona en 27 de Abril de 1860, declararon, á los efectos prevenidos en la ley de 6 de Julio de 1859, y á fin de cubrir su responsabilidad, que la Sociedad *La Victoria* conservaría hasta su completa disolución su carácter especial de minera, con domicilio en dicha ciudad, que se consideraría como junta directiva la comisión liquidadora y que quedaban en su fuerza y vigor los derechos y obligaciones consignados en los pactos y reglamentos sociales, así como el acuerdo de liquidación:

Resultando que en junta general celebrada en 15 de Setiembre de 1865, el Presidente D. José Costi dió cuenta de que la comisión liquidadora, en uso de las facultades que se la concedieron en la sesión de 20 de Diciembre de 1858, había convenido con Mister Hardy Hislop la venta de todas las pertenencias de la empresa otorgando en 24 de Agosto anterior el contrato de promesa que sometía á la aprobación de los accionistas, el cual fué aprobado por la mayoría de los presentes:

Resultando que en 6 de Octubre siguiente D. Juan Inza, por si y como apoderado de la viuda é hijos de D. José Herrero, entabló demanda en el Juzgado de primera instancia de Almodóvar del Campo, deciendo hacer uso de la acción mixta que le correspondía, y que su conocimiento compelia al mismo Juzgado con arreglo al art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil por ser el del lugar donde estaban sitas las minas y el del cumplimiento de la obligación, y pidió se declarara la nulidad del acta de 20 de Diciembre de 1858, y como consecuencia la del

proyecto de contrato celebrado con Mister Hardy Hislop:

Resultando que conferido traslado á D. José Costi, como presidente de la Sociedad *La Victoria*, para su emplazamiento se libró exhorto al Juez de primera instancia de Pamplona, ante el que Costi y los demás que componían la Sociedad liquidadora acudieron en solicitud de que con retención del exhorto se declarara competente para conocer del asunto, mediante á que la acción que se deducía por Inza era personal nacida del contrato de sociedad, y esta se hallaba domiciliada en aquella capital, según la escritura de reconstitución y reglamento formado para su gobierno y dirección:

Resultando que por haberse negado el Juez de Almodóvar del Campo á la inhibición propuesta por el de Pamplona se promovió esta competencia: y que para sostener el segundo la suya alega, que aunque las partes pueden ejercitar la acción que tengan por conveniente, no les es permitido calificar torcidamente la que ejerciten para eludir las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, según así lo tiene declarado este Tribunal Supremo en sentencia de 3 de Febrero de 1859: que los demandantes ejercitan la acción nacida del contrato de sociedad para exigir su cumplimiento, lo cual es personal, sin que pueda concederse que tenga carácter de real, ni por consiguiente ser calificada de misma; y que con arreglo al art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina sancionada por repetidas sentencias de este Tribunal Supremo, no habiendo en el caso actual obligación especial contraída que deba cumplirse en lugar determinado, si no la general nacida entre todos los asociados en virtud del contrato de sociedad, es Juez competente para conocer de la demanda el del domicilio de aquella:

Y Resultando que el Juez de Almodóvar del Campo en apoyo de su jurisdicción, expone: que deduciéndose por los demandan-

dantes una acción mixta de real y personal, es Juez competente para conocer de ella el del lugar de la cosa litigiosa y el en que deba cumplirse la obligación y en ambos casos se encuentra la demanda, porque las minas, objeto de la obligación, radican en término jurisdiccional de Almodóvar y la obligación de que nace la acción se deriva de la escritura de fundación otorgada en la misma en 18 de Mayo de 1851, y no en la de reconstitución de la Sociedad de 21 de Abril de 1860, en la que los demandantes no contrajeron obligación alguna;

Vistos, siendo Ponente el Ministro Don Miguel de Nájera Mencos:

Considerando que siendo puramente personal la acción que se ejerce como derivada del primitivo contrato de sociedad, y no habiéndose designado en el contrato el lugar en que debieran cumplirse las obligaciones, es el domicilio del demandado el que determina la competencia del Juez que debe conocer de los autos de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil:

Y considerando que la Sociedad demandada *La Victoria* tiene su domicilio en Pamplona, según la escritura de su reorganización, y reglamento de su gobierno y dirección;

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de estos autos corresponde al Juez de primera instancia de Pamplona, al que se remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda en derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Gobierno e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Sebastián González Nandín.—Miguel de Nájera Mencos.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elio.

Publicación:—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Excmo. S

Gobierno de provincia que se afana por llenar los justos deseos de la Dirección general de Estadística.

Este ramo importante de la Administración pública se mira con la mayor indiferencia por los pueblos, demostrando con ello su completa ignorancia.

En su consecuencia y con el fin de cortar de raíz esta falta de celo en un servicio tan interesante y delicado de suyo, prevengo á los referidos Alcaldes, que si en el preciso término de tercero dia no remiten las indicadas noticias, les exigiré la multa de cuatro escudos con que quedan desde luego conminados.

Guadalajara 4 de Abril de 1866.

El Gobernador accidental,
José de la Casa y Robles.

Partido de Atienza.

Alcolea de las Peñas.

Atienza.

Condemios de Arriba.

Galve.

Huérce.

Madrigal.

Veguillas.

Partido de Brihuega.

Argecilla.

Cañizar.

Carrascosa de Henares.

Castilmembre.

Muduex.

Olmeda del Extremo.

Padilla de Hita.

Romancos.

Torre del Vulgo.

Villanueva de Argecilla.

Yela.

Partido de Cifuentes.

Canredondo.

Patilla de Medinaceli.

Puerta (La).

Trillo.

Valtablado del Río.

Partido de Guadalajara.

Aldanares.

Chiloeches.

Gajapagos.

Horche.

Marchamalo.

Torrejón del Rey.

Valbuena.

Valdenoches.

Yebes.

Partido de Molina.

Checa.

Megina.

Traíd.

Partido de Pastrana.

Albalate de Zorita.

Albares.

Partido de Sacedón.

Chillarón del Rey.

Recuenco.

Partido de Sigüenza.

Bujarrabal.

Eguavíñan.

Saucia.

Torremocha de Jadraque.

Tortolada.

Viana y Vianilla.

Partido de Tamajón.

Cubillo.

Membrillera.

Retiendas.

Valdepeñas de la Sierra.

Valdesotos.

Ilmo. Sr. D. Miguel de Nájera Mencos, Ministro de la Sala segunda y de Indias del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el dia de hoy que yo el Escribano de Cámara habilitado certifico.

Madrid 15 de Marzo de 1866.— Francisco Valdés.

En la villa y corte de Madrid, á 13 de Marzo de 1866, en el pleito pendiente ante Nos por recurso de casacion, seguido en el Juzgado de primera instancia de Granollers, y en la Sala primera de la Real Audiencia de Barcelona por D. Ramón Bordoy y Auleda con Doña Antonia Auleda de Bordoy y D. Ambrosio Bordoy y Auleda sobre suplemento de legítima:

Resultando que con motivo del matrimonio concertado entre D. Ambrosio Bordoy y Auleda y Doña Ana Cañellas se otorgó escritura de capitulaciones en 7 de Febrero de 1828, en la que el padre de aquél, D. José Bordoy, le instituyó heredero universal con el pacto de que, en el caso de que su mujer Doña Antonia Auleda le sobreviviera, usufructuase todos los bienes mientras se conservase viuda; reservándose la facultad de dotar á sus demás hijos é hijas, según la posibilidad de sus bienes; queriendo, para el caso de morir sin haberlos dotado, que se les entregasen en dote ó por sus derechos de legítima paterna 150 libras catalanas á cada uno de los hijos, y 300 con dos baules con las ropas y vestidos á cada una de las hijas, reservándose por último el derecho de poder hacer las mandas y legados que tuviera por conveniente, siempre que no excedieran de 2.000 libras.

Resultando que D. José Bordoy falleció en 18 de Julio de 1834 con testamento otorgado en 12 de Abril de 1833, en el que señaló 50 libras á cada uno de los ocho hijos varones, además de las 150 que les había consignado en los capítulos matrimoniales del primogénito;

Resultando que en 2 de Abril y 29 de Octubre de 1854, 27 y 29 de Noviembre de 1860, D. Dionisio, D. Juan, D. Ramón y D. Jaime Bordoy otorgaron carta de pago á favor de su hermano Don Ambrosio, declarando haber recibido del mismo, en concepto de heredero universal de su padre, las cantidades asignadas en los capítulos matrimoniales ántes expresados y en el testamento de aquel en pago de sus derechos de legítima, dando por satisfechos de cuantos les pudieran corresponder en los bienes del padre, que renunciaban en favor de su hermano Don Ambrosio, con promesa de *nada más pedir*:

Resultando que D. Ramón Bordoy entabló demanda en 3 de Junio de 1862 para que se declarase que su madre Doña Antonia Auleda y su hermano D. Ambrosio, como usufructuaria y heredero respectivamente de D. José Bordoy, estaban obligados á pagarle, por sí y como cesionario que acreditó ser de sus hermanos D. Jaime y D. Dionisio, la legal y justa cantidad correspondiente por las tres décimas partes de la cuarta legítima, deducidas las cantidades que hubieren percibido anteriormente, con mas los intereses legales devengados desde la muerte del padre común, á razon de 3 por 100

hasta mediaños de 1856, y de 6 por 100 desde esta fecha hasta la en que se efectuase al pago, con las costas que se hubiesen originado; pretension que fundó en que estando señalada por la ley en Cataluña como legítima de los hijos la cuarta parte de los bienes de los padres, con sus frutos é intereses desde su fallecimiento, había sufrido una lesion enormísima, puesto que tan solo había recibido 600 libras catalanas por sus derechos legítimos, y 450 cada uno de sus hermanos, siendo así que ascendiendo los bienes á 94.630 libras, debía recibir por sí y como cesionario de aquellos, con los intereses devengados y rebajadas las 1.500 percibidas, 11.532 libras y 10 sueldos.

Resultando que los demandados impugnaron la demanda alegando que el patrimonio que había dejado D. José Bordoy no ascendía á 20.000 libras, habiéndose dado por satisfechos sus hermanos con la cantidad que declaraban haber recibido, renunciando el suplemento de legítima y todo otro derecho;

Resultando que practicada por las partes prueba sobre la consistencia de los bienes, dictó sentencia el Juez de primera instancia absolviendo á los demandados de la demanda, y condenando al demandante en las costas, y que confirmada, sin esta condenación, por la Sala primera de la Real Audiencia de Barcelona en 14 de Julio de 1864 por no haber justificado el demandante la lesion en que apoyaba su demanda, interpuso recurso de casacion, alegando que no se había tenido en cuenta lo dispuesto en la Novela 18, capítulo 1.^o, y en la 2.^o Digesto *De inoficioso testamento*, con arreglo á las que podían pedir el suplemento de legítima los hijos que no hubiesen recibido cuanto por ella les correspondiera de la herencia paterna; que tampoco se había aplicado la ley 2.^o tit. 2.^o libro 6.^o volumen 1.^o de las Constituciones de Cataluña, según la cual era suficiente que los padres dejaran algo á los hijos por vía de legítima, cuyo suplemento podían reclamar, según la ley 5.^o tit. 8.^o Partida 6.^o en el caso de que el padre no les hubiera señalado en el testamento cuanto les correspondiera; y por último, que tampoco se había aplicado la doctrina legal que se desprendia de la sentencia dictada por este Supremo Tribunal en 9 de Noviembre de 1863, según la que había lugar al suplemento de la porción legítimaria cuando, como en el caso actual, había mediado lesion enorme ó enormísima en el percibo de la legítima; visto, siendo Ponente el Ministro Don José María Pardo Montenegro.

Considerando que con arreglo á lo dispuesto en las leyes 1.^o y 2.^o tit. 14, Partida 3.^o, al demandante incumbe probar su acción, de tal suerte, y que no haciéndolo debe ser absuelto el demandado;

Considerando que el demandante, por sí y como cesionario de sus dos hermanos entabló contra el demandado y su madre acción de suplemento de legítimas por la lesion enorme y enormísima que suponía haber sufrido en la percepción de lo que en pago de ellas les había entregado, dando por satisfechos de cuantos derechos pudieran corresponderles, que renunciaron en su favor con promesa bajo juramento de *nada más pedir*; y que la Sala sentenciadora, en uso de las facultades que la

concede el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha estimado que el actor no justificó esta lesion, base de su demanda, contra cuya apreciación no ha citado ley ni doctrina alguna legal:

Y considerando que la Novela 18, capítulo 1.^o; la ley 23 Digesto *De inoficioso testamento*; la 2.^o, tit. 2.^o, volumen 1.^o de las Constituciones de Cataluña; la 5.^o, título 8.^o; Partida 6.^o, y la doctrina que se desprende de la sentencia de este Tribunal Supremo de 9 de Noviembre de 1863, que se invocan en el recurso, no son aplicables al presente caso, porque no se refieren al de no haberse acreditado la lesion, y que los herederos se hubiesen dado, como aquí ha sucedido, por satisfechos de sus legítimas, y que por lo mismo la Sala sentenciadora, al absolver á los demandados, no ha infringido dichas leyes;

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por D. Ramón Bordoy y Auleda, á quien condenamos en las costas; devolviéndose los autos á la Real Audiencia de Barcelona con la certificación correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Martín Carramolino.—Joaquín de Palma y Vinuesa.—Tomás Huet.—Manuel José de Posadillo.—Gregorio Juez Sarmiento.—José María Herreros de Tejada.—José María Pardo Montenegro.

Publicación—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Don José María Pardo Montenegro, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública en su Sala primera, Sección segunda, el dia de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 13 de Marzo de 1866.—Luis Carrion Hinojal.

SECCION SEGUNDA.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

Circular núm. 5.

Por circular fecha 6 de Febrero último, inserta en el Boletín oficial del siguiente dia, recomendé á todos los Alcaldes de los pueblos de esta provincia la pronta remisión de los estados referentes á animales dañinos, cuyos modelos á continuacion tambien se insertaban.

En la misma circular les manifesté, que la prontitud ó negligencia que advirtiera en este servicio, habría de darme á entender quiénes eran las Autoridades que debiera colocar entre las que se distinguen en servicios de esta índole y cuáles entre las apáticas y morosas.

Desgraciadamente los pueblos que al final se expresan son los que merecen ser inscritos en el segundo lugar, cuyo abandono no puedo tolerar por mas tiempo.

Es un abuso que entorpece la marcha natural del servicio y que estoy decidido á castigar severamente. No han sido bastante desmes para la confección de unos estados tan sencillos, ni tampoco las excitaciones de este

Núm. 6.

D. José de la Casa y Robles, Gobernador accidental de esta provincia.

Hago saber: Que D. Manuel Clement, á cuyo favor se halla expedido el título de propiedad de la mina nombrada *Esperanza*, sita en término de Pardos, puede recoger dicho título de la Sección de Fomento de esta provincia, por sí ó por persona competentemente autorizada, á fin de que tome posesión de la referida mina dentro del término de dos meses.

Lo que para conocimiento del interesado y efectos consiguientes se anuncia en este periódico oficial.

Guadalajara 4 de Abril de 1866.

El Gobernador accidental.

José de la Casa y Robles.

Núm. 7.

En el sorteo celebrado el dia 3 del actual para adjudicar el premio de 250 escudos concedido en cada uno á las huérfanas de Militares y patriotas muertos en campaña, ha cabido en suerte dicho premio á D. Teresa Boada, hija de D. José, Subteniente de la Milicia Nacional de la Espuga de Francolí, muerto en el campo del honor.

Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para los efectos correspondientes.

Guadalajara 4 de Abril de 1866.
El Gobernador accidental,
José de la Casa y Robles.

SECCION QUINTA.

ANUNCIOS OFICIALES.

ESCUELA ESPECIAL de Administración militar

Acordada por el Excmo. Sr. Director general del Cuerpo la provisión de 30 plazas de alumnos para reconstituir el personal escolar al tipo normal establecido en el art. 2º del reglamento vigente, en el curso de 1866 á 1867; y autorizada por S. E. la consiguiente convocatoria á exámenes para optar á ocuparlas, se publica el presente llamamiento, á tenor de lo prescrito en el art. 74, á fin de que los aspirantes tengan entendidos los siguientes supuestos a que deberán atenerse, tanto respecto á la oportunidad y circunstancias de sus gestiones, cuanto á la aptitud que habrá de exigirseles en el concurso, y á la perspectiva de interés que se ofrece á su pretension.

1.º Las indicadas plazas se adjudicarán á los 30 examinados a quienes en virtud de las pruebas de los ejercicios y demás consideraciones que se dirán, resultasen asignadas por los tribunales de examen las notas mas aventajadas entre los aprobados de todo el concurso; y una vez cubierto el citado número, quedará el resto de los aspirantes sin opción á ingreso, aunque aparezcan con calificaciones aceptables.

2.º Los admitidos entrarán á figurar en el primer año de enseñanza de la carrera, siendo tres los que la constituyen, no pudiéndose pasar de uno a otro sin haber sido aprobado en el inmediato inferior, y no habiendo derecho á repetir mas que una vez cualquiera de ellos. Los cursos durarán desde 1º de Setiembre á fin de Junio.

3.º La edad requerida para presentarse á concurso es la de 17 años por lo menos y de 23 á lo mas, en 1º de Setiembre del año actual.

4.º La aptitud física de los aspirantes se someterá á un reconocimiento facultativo en que regirán las bases dictadas en

vincias, ha servido de regla constante para el despacho de los expedientes de esta naturaleza que sucesivamente se han presentado.

Considerando que desde entonces la provisión de las plazas indicadas se ha verificado mediante anuncio de la vacante en el Boletín oficial de la provincia, informe del Ayuntamiento y propuesta en la del Gobernador, cuando se ha presentado número suficiente de aspirantes con el título de Ensayador de metales, necesario para el desempeño de este cargo y sin limitación de tiempo, la Reina (que Dios guarde) ha tenido á bien resolver que interin D. Joaquín Prolongo no insista en la renuncia que presentó en 17 de Octubre de 1853 y que no le fué aceptada en virtud de lo manifestado por ese Gobierno de provincia, no puede considerarse vacante dicha plaza.

Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para los efectos correspondientes.

Guadalajara 4 de Abril de 1866.
El Gobernador accidental,
José de la Casa y Robles.

3

los cuadros de exenciones de esta especie para el servicio militar, y la determinarán una salud perfecta, la ausencia de toda lesión orgánica de las que exceptúan de aquel servicio, y un desarrollo corporal que corresponda á la edad del interesado.

5.º Las instancias en solicitud de examen se producirán por los mismos aspirantes, y de su puño y letra, al Excelentísimo Sr. Director general de Administración militar; expresando en ellas el punto en que residan y las señas más adaptadas para que se les comunique cualquier resolución. Vendrán acompañadas de los documentos siguientes:

Su partida de bautismo.

La de casamiento de sus padres, ambas legalizadas en debida forma; en defecto de esta última, el documento público y fehaciente que acredite haber sido legitimado el solicitante.

Copia del Real despacho, título ó nombramiento del padre, si este fuere empleado del Gobierno; y si no lo fuere, certificación de la Autoridad competente, donde conste la profesión, ejercicio ó modo de vivir del mismo, ó la que hubiere tenido y tenga el hijo, si su padre no existiese.

Una obligación del padre, tutor ó encargado del pretendiente, comprometiéndose á asistirle con cuanto necesite para su decorosa manutención, depositando en las cajas del Tesoro una anualidad de asistencias, ó sean 360 escudos, á disposición del Director general, a cuyo efecto unirá á la instancia el recibo ó carta de pago del depósito, en la inteligencia de que, de no llenarse esta formalidad dentro del plazo señalado para la admisión de instancias perderá su derecho al examen.

Una certificación del Gobernador civil de la provincia, del Inspector de Vigilancia ó del Alcalde (constitucional), según fuere el punto de residencia, donde conste la buena conducta del interesado.

Fe de soltería del mismo librada por el Cura párroco y legalizada.

En virtud de soberana resolución dictada sobre consulta de esta Escuela, relativa al actual llamamiento, se deberán acompañar á las instancias, además de los justificantes anteriormente prescritos, certificados de cuantas materias hayan aprendido los solicitantes, firmados estos documentos por los Directores de los Institutos ó Colegios en que las hubiesen cursado, y precisamente por los Profesores de quienes hubiesen recibido respectivamente la enseñanza.

6.º Los jóvenes que hayan sido admitidos en los Colegios militares, y los que tengan ó hayan tenido hermanos de padre ó madre en esta Escuela, solo presentarán los documentos personales, á saber: la fe de bautismo, la de soltería, la certificación de buena conducta, los antedichos certificados de estudios y la obligación de asistencia. Los jóvenes admitidos anteriormente en Colegios militares deberán justificar las causas por que abandonaron la carrera á que se dedicaban, acompañando á su expediente el oficio original de su baja en aquellos establecimientos.

7.º Si los aspirantes residiesen con sus familias en esta corte, la obligación de asistencias arriba designada se reducirá únicamente al compromiso de sostenerlos

con el correspondiente decoro durante sus estudios.

8.º Están relevados del depósito de la anualidad de asistencias los hijos de los Jefes y Oficiales de los cuerpos e institutos del Ejército y Armada en activo servicio, bastando solo que la obligación se extienda en papel sellado de la clase correspondiente, autorizándola un Comisario de Guerra.

9.º Las solicitudes, así documentadas, habrán de llegar á manos del Excmo. Señor Director general de Administración militar antes del dia 1º de Junio del corriente año, trascurrida cuya fecha no será admisible ninguna. La subsanación de los defectos ó omisiones que se noten en los expedientes oportunamente iniciados solo tendrá de prórroga 15 días sobre aquel término, esto es, hasta el 15 del mismo Junio en que deberán quedar solventados los aludidos inconvenientes, so pena de nulidad de la solicitud, en cuyos conceptos deberán los interesados ó sus representantes acercarse con frecuencia a la Dirección para enterarse del estado de aquellas.

10. En el dia 30 del repetido mes se han de presentar en la Escuela todos los aspirantes cuyas solicitudes a examen hubiesen obtenido aprobación, para señalarse días en que experimentar el reconocimiento facultativo.

11. En el dia 30 de Julio siguiente se verificará entre los que hubiesen resultado útiles del ante dicho reconocimiento, el sorteo que ha de establecer el orden con que han de ir acudiendo á los ejercicios de examen, y no habrá lugar á ser incluido en estos actos si no se hubiese entrado en el referido sorteo.

12. Los exámenes de ingreso darán principio en 1º de Agosto sucesivo, y se dividirán en dos ejercicios:

Comprenderá el primero gramática y ortografía castellanas. Consistirá este examen en el desarrollo por escrito de un sencillo tema sacado á la suerte, y analizado después por analogía y sintaxis con las reglas de ortografía practicadas, debiendo los aspirantes escribir bien y correctamente. Ejercicio fácil y correcta del francés. Historia de España.

El segundo ejercicio comprenderá: Aritmética en toda su extensión. Álgebra hasta las ecuaciones de segundo grado inclusive. Partida doble y cambios.

13. La instrucción en estas materias se deberá probar con la extensión que marquen los programas que al efecto se redacten con aprobación del Excmo. Señor Director general.

Los examinandos contestarán á tres preguntas por lo menos de cada programa, sacadas á la suerte. Las censuras que se asignarán á la prueba de cada una de las materias serán las de sobresaliente, muy bueno, bueno, mediano y atrasado; las cifras numéricas con que se denotarán estos distintos resultados serán un 9 para sobresaliente; el 7 y 8 para las gradaciones del muy bueno; el 4, 5 y 6 para las del bueno; el 1, 2 y 3 para las del mediano, y con el 0 se acusará el completo atraso.

No pasará el segundo ejercicio el aspirante que no fuese aprobado en el primero. Solo se considerarán aprobados los que alcancen cuando menos la censura de bueno por pluralidad de votos en todas las

